

LOS INCLUIDOS Y LOS QUE SIGUEN AFUERA

PROTEGER EL EMPLEO

Por Mariana L. González (CIFRA-CTA)

Esta nota fue publicada en el [diario Página/12 del lunes 4 de junio de 2012](#).

Asistimos en estos momentos a un nuevo proceso de recrudescimiento de la crisis económica internacional, esta vez con epicentro en las economías europeas. Esta crisis tendrá seguramente repercusiones en la economía de nuestro país, principalmente por la menor demanda de nuestros productos de exportación así como por el comportamiento de las empresas transnacionales instaladas en nuestro país, que en contextos como el actual buscan rápidamente reducir costos y remitir la mayor cantidad posible de fondos a sus casas matrices.

De hecho, existen desde hace algunos meses indicios ciertos que muestran que se está verificando un proceso de paulatina disminución del crecimiento en la economía argentina. Además de la menor tasa de crecimiento del PIB y la caída de las exportaciones es importante considerar la retracción de la inversión en los últimos trimestres del año pasado.

Sin embargo, esta reciente desaceleración del crecimiento prácticamente no tuvo, de acuerdo con los últimos datos disponibles, repercusiones negativas en el mercado laboral. En el último año se crearon alrededor de 400.000 puestos de trabajo en términos netos, que son puestos registrados en su gran mayoría. Además, el salario real promedio tuvo un incremento cercano al 5%, tanto para los asalariados registrados como para los que no son registrados.

Este aumento del empleo y la mejora en el poder adquisitivo de los salarios tuvo sin dudas influencia en las condiciones de vida de los hogares de Argentina. De acuerdo con estimaciones propias, la incidencia de la pobreza también se redujo, de modo que el porcentaje de personas viviendo en hogares con ingresos bajo la línea de pobreza pasó de un promedio anual de 22,5% en 2010 al 20,1% en 2011.

Esta reducción en la pobreza implica una continuidad en la tendencia que se sostuvo desde 2003 en adelante. Vale recordar que a inicios de ese año más de la mitad de la población de nuestro país vivía en condiciones de pobreza. Esta proporción se redujo con rapidez, en un marco de una economía en crecimiento con fuerte generación de empleo, incremento de los ingresos de los ocupados –con mayor intensidad en los salarios de niveles más bajos– y mejoras en los haberes jubilatorios. En el último trimestre de 2006, la incidencia de la pobreza se había reducido ya al 25,2%. Desde entonces, la tasa de pobreza continuó disminuyendo (con la excepción del año 2007) aunque con un ritmo más pausado.

Hay que considerar, de todos modos, que los datos de 2011 muestran una situación que no es posible soslayar. El porcentaje mencionado representa a aproximadamente 1,7 millones de familias formadas por más de 8 millones de personas. Además, el valor de la línea de pobreza (es decir, el nivel de ingresos que debe alcanzar un hogar para no ser considerado pobre según esta

metodología) es relativamente bajo. Para una familia tipo, compuesta por un varón y una mujer de edad adulta, un adolescente y una niña, se considera que el hogar es pobre si los ingresos totales no superan los \$2.800.

Por todo lo anterior, es preciso insistir en la necesidad de implementar políticas específicas que apunten a reducir la pobreza. Si bien la creación de la Asignación Universal por Hijo –además de ser un paso fundamental en la universalización de los derechos de los niños y adolescentes– se ha constituido en una medida trascendente para la lucha contra la indigencia y la contención de la pobreza, la persistencia de un nivel elevado de pobreza pone de manifiesto la importancia de realizar políticas adicionales.

En un contexto de desaceleración de la economía y ante la posibilidad de un mayor impacto de la crisis internacional en nuestro país, tales medidas son aún más necesarias, previendo los efectos que el menor crecimiento pueda tener sobre el mercado de trabajo y, por esta vía, en las condiciones de vida de los hogares. En este sentido, las políticas que apunten a proteger el empleo, así como las políticas de ingreso, en especial aquellas dirigidas a los sectores de menor nivel socioeconómico, pueden conllevar una mayor reducción de la pobreza y, al mismo tiempo, contribuir al fortalecimiento del mercado interno y al sostenimiento del nivel de actividad.